



Proceso	Verbal
Demandante	John Jairo Mazo Arango
Demandada	Ligia Uribe Correa y otros
Radicado	No. 05001-31-03-008-2018-00380-01
Procedencia	Juzgado 8° Civil del Circuito de Oralidad de Medellín
Instancia	Segunda
Ponente	Luis Enrique Gil Marín
Interlocutorio	No. 056
Asunto	Recurso de apelación
Decisión	Declara desierto recurso
Tema	Requisitos recurso de apelación.
Subtemas	El recurso de apelación. Finalidad del recurso de apelación. Requisitos para que se abra paso la impugnación. Se presentan casos donde la impugnación de algunos de los argumentos que soportan la decisión no es suficiente para obtener la revocatoria total o parcial de ésta. Cuando la decisión se soporta en varios argumentos y cada uno de ellos por si solo es suficiente para sustentarla el recurrente tiene la carga de atacar todos esos argumentos. Cuando el juez de segundo grado no puede revocar total o parcialmente la sentencia porque el reparo o los reparos son incompletos no se abre la competencia del juez de segunda instancia.

**TRIBUNAL SUPERIOR**

**SALA UNITARIA DE DECISION CIVIL**

Medellín (Ant.), nueve de mayo de dos mil veintitrés

Efectuada la revisión del proceso verbal instaurado por **JOHN JAIRO MAZO ARANGO**, contra **LIGIA URIBE CORREA y**

**PERSONAS INDETERMINADAS,** con miras a desatar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia que puso fin a la primera instancia, se advierte que la Sala no puede abordar el conocimiento del recurso interpuesto por las razones que se pasan a esgrimir:

En la audiencia de instrucción y juzgamiento, efectuada el 24 de septiembre del año 2021, se profirió sentencia negando las pretensiones de la demanda, por ausencia de los presupuestos axiológicos para la acción de usucapión y condenó en costas a la parte demandante; como fundamentos de la decisión expuso: 1) No se individualizó el bien inmueble de mayor extensión del que hace parte el apartamento 201 objeto del proceso; aunque este último si fue debidamente determinado conforme lo indicado en la diligencia de inspección judicial; amén, que en el libelo genitor confusamente se identifica con la matrícula inmobiliaria del predio de mayor extensión, desconociendo lo previsto en los arts. 83 y 375-9 del C.G.P.; en lo concerniente con el lote de mayor extensión no se verificó porque la parte actora no notificó al experto designado ni realizó gestión alguna para que elaborara el correspondiente informe, ni adujo ningún impedimento para ello.

2) No se acreditó en debida forma la posesión ejercida por el demandante con ánimo de señor y dueño por el tiempo legalmente establecido, porque si bien el pretensor y la declarante Elizabeth Mazo, refirieron a múltiples hechos e hicieron mención a compraventas anteriores debidamente documentadas, las mismas no fueron aportadas, quedando en

meras afirmaciones carentes de respaldo probatorio; incluso, los hechos de la demanda refiere a una compraventa celebrada entre Elizabeth Mazo y Nubia Valencia, en septiembre de 2008, sin que se hubiera aportado la respectiva prueba; no se allegó prueba de pago de los servicios públicos por parte del demandante ni de las mejoras que plantó; amén, que la deponente Lina Marcela no dio cuenta de las fechas en que se realizaron las mejoras; lo que consideraba el Juzgado categórico para determinar si se cumplía o no con los actos de posesión.

3) Frente a la suma de posesiones; es decir, la ejercida por la señora Elizabeth Mazo Arango antes del 05 de enero de 2010, que se debe sumar a la que ha ejercido el pretensor con posterioridad a esa fecha; se precisa por el fallador de primer grado, que en el plenario no se demostró con suficiencia la posesión ejercida por la señora Mazo Arango, para efectos de la suma de posesiones pretendida; sin que exista prueba que para la fecha de presentación de la demanda, el extremo activo hubiera cumplido con el término legal para prescribir.

Contra esta decisión, el extremo activo dentro de los tres (3) días siguientes a la audiencia de instrucción y juzgamiento, como puntos concretos de inconformidad señaló: la acción de pertenencia aparece prevista en el art. 762 del C. Civil, y la misma está compuesta por dos elementos esenciales, el corpus y el animus; la sentencia dijo que no se cumplió con la carga de identificar por sus linderos el inmueble a usucapir, lo que no resultaba necesario porque en el contrato de compraventa celebrado entre el demandante y la señora

Elizabeth Mazo Arango, se estableció de manera clara y precisa los linderos e identificación del apartamento 201, ubicado en la carrera 93 No. 83-21, del Barrio Villa Sofía de la ciudad de Medellín; además, en la diligencia de inspección judicial en pregunta que se hizo al demandante, quedó claro que los linderos y la identificación del inmueble eran los indicados en el citado documento; escrito debidamente suscrito y autenticado por los contratantes; el pretensor en el interrogatorio confesó que desde el año 2009, una vez realizada la compraventa, ingresó a vivir en el inmueble y empezó a efectuar las mejoras que canceló con su peculio; realizó la conexión de los servicios públicos y canceló los mismos; lo que fue corroborado por la testigo Elizabeth Mazo Arango, quien al igual que la deponente Marcela Uribe Gómez, reconocieron como señor y dueño del apartamento 201 al demandante; en vista de lo previsto en el art. 780-3 del C. Civil, no se puede desconocer la posesión que viene siendo ejercida por el pretensor, sin perturbación alguna; por lo que al demandante se le debe otorgar el título de propietario del inmueble a usucapir, toda vez, que en el momento lo tiene arrendado y es así como se reconoce como señor y dueño, tal como lo confesó en la declaración de parte y lo corroboraron las testigos en la versión que rindieron; indicando que la posesión se remonta a más de diez (10) años, tal como se establece para la prescripción adquisitiva de dominio; además, el demandante está legitimado en la causa. Por estas razones, solicita se revoque la decisión de primer grado y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda.

Como se puede ver, no fue objeto de inconformidad lo concerniente a la individualización del predio de mayor extensión del que hace parte el inmueble a usucapir; toda vez, que el recurrente refiere a que el bien objeto de la acción de prescripción está debidamente identificado por sus linderos y demás características de manera clara y precisa, lo que no fue desconocido por el Juzgado de conocimiento, sin presentar inconformidad alguna frente a lo argumentado en relación con la no individualización e identificación del lote de mayor extensión del que hace parte el bien objeto del proceso; tampoco, presenta reparos en relación a las consideraciones y conclusiones de la sentencia sobre la suma de posesiones, ni en cuanto a que no se acreditó con suficiencia la posesión ejercida por la señora Mazo Arango, para efectos de la sumatoria de posesiones, quedando en entredicho la posesión ejercida por el demandante durante el término legalmente establecido.

De lo anterior se sigue, que aun para el evento de que la segunda instancia no comparta los argumentos consignados en la decisión de primer grado y que son objeto de censura y que en efecto, le asiste razón al recurrente; lo cierto es que no puede revocar la decisión cuestionada, porque también se fundamentó en otros argumentos que por sí solos son suficientes para sostener y mantener la decisión y sobre los cuales, la parte demandante no formuló inconformidad alguna y, por lo tanto, al juez de segundo grado le está vedado el examen de estos puntos; se reitera, porque no fueron objeto de apelación, careciendo el fallador de segundo grado de competencia funcional para asumir tal tarea.

Desde vieja data la doctrina acogiendo la jurisprudencia patria ha sostenido: *"La Corte dice sobre el recurso de apelación: 'Por virtud del sistema procedimental de las dos instancias se origina el recurso de apelación, que es el más importante de los medios legales para la impugnación de las decisiones judiciales, y de acuerdo con el derecho procesal el resultado de la apelación, cuando el recurso no tiene buen éxito, es la confirmación de la resolución apelada; o su revocación o su reforma cuando el recurso prospera, pero en este caso con el pronunciamiento por parte de la superioridad jerárquica, de la correspondiente resolución sustitutiva de la reformada o revocada (LX, 143)"* (Curso de Derecho Procesal – Parte General; Décima Edición. Editorial ABC – Bogotá 1998; Pág. 582).

Como se puede advertir, el recurso de apelación tiene por finalidad la revocatoria total o parcial de la decisión de primer grado. Y si de antemano, se advierte que al juez de segundo grado le está vedado tal pronunciamiento, como ocurre en el presente caso y como viene de explicarse, no se abre la competencia de la segunda instancia para conocer válidamente del proceso y, de contera, del recurso de alzada.

Lo anterior implica que si el juez de primer grado esboza varios argumentos para emitir una decisión y cualquiera de ellos, por si solo es suficiente para sustentar y mantener la decisión, al recurrente no le basta con escoger o tomar al azar uno cualquiera de esos argumentos para cuestionarlo; pues si en verdad, aspira a la revocatoria total o parcial de la

providencia, tiene la carga de formular un reparo completo, que comprenda el ataque a cada uno de esos fundamentos, que por sí solos le dan soporte a la decisión, pues de no ser así, no surge la competencia del juez de segundo grado para pronunciarse sobre tal proveído. Al efecto, el inciso 2º del numeral 3º del Art. 322 del C.G.P., ordena en lo pertinente:

*“Cuando se apele una sentencia, el apelante, al momento de interponer el recurso en la audiencia, si hubiere sido proferida en ella, o dentro de los tres (3) días siguientes a su finalización o a la notificación de la que hubiera sido dictada por fuera de audiencia, deberá precisar, de manea breve, los reparos concretos que le hace a la decisión, sobre los cuales versará la sustentación que hará ante el superior”.*

Y el inciso 1º del artículo 328 Ib., sobre la competencia del superior indica: *“El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos en la ley”.*

Consecuente con lo expuesto, como la Sala no tiene competencia funcional como viene de indicarse, se declarará inadmisibile el recurso interpuesto y se ordenará la devolución del expediente al Juzgado de primer grado.

A mérito de lo expuesto, la **SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN,**

## **R E S U E L V E:**

- 1.** Se declara inadmisibile el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida el veinticuatro (24) de septiembre del año 2021, por las razones indicadas en la parte motiva.
- 2.** Ejecutoriado este auto, se ordena que por la Secretaría se devuelva el expediente al Juzgado de origen.

## **NOIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luis Enrique Gil Marin', with a long horizontal stroke extending to the right.

**LUIS ENRIQUE GIL MARIN**  
**Magistrado**